

FOJA: 43.- cuarenta y tres.-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 15° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-12573-2022  
CARATULADO : RUBILAR/SERVICIO DE VIVIENDA Y  
URBANIZACION REGION METROPOLITANA - SERVIU

Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro

**VISTO:**

Que a folio 1, con fecha 2 de noviembre de 2022, rectificada por presentación de folio 6 con fecha 23 de noviembre del mismo año, comparece don Luis Alberto Celedón Miranda, estudiante, en representación judicial de (1) doña **Sonia Graciela Gallegos Muñoz**, jubilada, (2) doña **Tatiana Idalia Briones Gallegos**, artífice, (3) doña **María Gladys Valenzuela Cisterna**, jubilada, (4) doña **María Eulalia Martínez Salcedo**, trabajadora, (5) doña **Silvia Del Carmen Lagos Pulgar**, trabajadora, (6) doña **Marisol Del Pilar López Figueroa**, trabajadora, (7) doña Erika del Rosario Espinoza Allende, trabajadora, (8) doña **Eliana Helvia Matus Naranjo**, jubilada, (9) **Ana Georgina Oteíza Vergara**, trabajadora, (10) doña **Angélica Lucía Farías Martínez**, trabajadora, (11) doña **Angélica Jeannette Tapia Vásquez**, trabajadora, (12) doña **Sussy Del Carmen Oteíza Vergara**, jubilada, (13) doña **Elizabeth Marisol Riquelme Flores**, trabajadora, (14) doña **Marcela Carmen Maldonado Alegre**, jubilada, (15) don **Fabián Segundo Manquela Pichulmán**, trabajador, (16) don **Rafael Ernesto Londoño Briones**, abogado, (17) doña **Camila Yasmín Londoño Briones**, trabajadora, (18) don **Raúl Sebastián Vera Castillo**, trabajador, (19) doña **Marjorie Solange Millán León**, trabajadora, (20) doña **Juana Del Carmen Collinao Valenzuela**, trabajadora, (21) don **Abelino Segundo Latorre Moya**, trabajador, y (22) doña **Jocelyne Magdalena Rubilar Sánchez**, estilista, todos con domicilio para estos efectos en calle Compañía número mil trescientos noventa, oficina número mil novecientos dos, comuna y ciudad de Santiago, quien en la representación que inviste interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del **SERVICIO DE VIVIENDA Y**



Foja: 1

**URBANIZACION REGION METROPOLITANA**, servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en adelante SERVIU, representado legalmente por su Directora doña Juana Myriam Nazal Bustos, ingeniera, ambos domiciliados en calle Serrano N°44, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

#### **I. Antecedentes de hecho.**

Relata que con fecha 20 de octubre del año 2008, en el marco del Programa de Fondos Sociales Concursables para viviendas sociales, **dirigido y fiscalizado por el SERVIU Metropolitano**, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante Resolución Exenta Nro. 7081, otorgó subsidios por un monto total de 672 UF para **140** personas (y su respectivo grupo familiar, desde luego), en un proyecto que consideraba -desde su aprobación hasta su construcción- 150 departamentos de una calidad superior a los que tradicionalmente se han construido, agregando que entre los 140 beneficios se encuentran los 22 demandantes.

Señala que con el transcurso del tiempo, el proyecto sufrió una serie de problemas, desde cuestiones imputables o atribuibles a la empresa constructora, la EGIS/PSAT, entre otros; sin embargo, y según da cuenta Ordinario N°5053 de fecha 8 de julio del año 2010, del Jefe del Departamento Obras de Edificación del SERVIU-RM al Jefe de Departamento Préstamos y Subsidios, encontrándose las obras en un avance de ejecución al 90%, con fecha 9 de febrero del año 2010 y 13 de mayo del mismo año fueron paralizadas por instrucciones del Gabinete de la Presidencia, por observarse “irregularidades” que impedirían la inauguración del proyecto por parte de la entonces presidenta de la República doña Michelle Bachelet.

Expone que luego de dos denuncias, de fecha 9 y 12 de marzo del año 2010 por parte de dos socios del COMITÉ DE ALLEGADOS POETA PABLO NERUDA, constituido como organización comunitaria funcional al amparo de la letra d) del artículo 2º de la Ley N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, otorgándosele personalidad jurídica con fecha 16 de marzo del año 2005 por Decreto Alcaldicio de la Ilustre Municipalidad de San Ramón, que rola bajo el N°1.135-2005 en la Secretaría Municipal de la antedicha institución. Los 22 demandantes también eran parte de dicho Comité.

Seguidamente, la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, por Resolución Exenta N°1397, de fecha 23 de julio de 2010, ordenó se iniciara procedimiento administrativo por posibles infracciones a Convenio Marco Único Regional EGIS/PSAT respecto a la Inmobiliaria Pablo Laurín S.A., concluyendo dicho procedimiento administrativo sancionando a la EGIS/PSAT



Foja: 1

(Entidad de Gestión Inmobiliaria Social y Prestador de Servicios de Asistencia Técnica), que los propios socios del Comité constituyesen por “incumplimiento del Convenio Marco Único Regional...”; todo lo cual se tradujo en la paralización de las obras, presentación de sendas querellas y otras gestiones, entre las cuales se encuentra sentencia dictada por el Segundo Juzgado Civil de San Miguel, en los autos rol C-20146-2013 y que condenó al antedicho Comité a la restitución a ciertos ex socios de dineros aportados para la adquisición del terreno.

Así las cosas, sostiene que el proyecto reanudó los trabajos pendientes tras otorgarse los 10 restantes subsidios habitacionales mediante Resolución Exenta Nro. 6857, de 24 de agosto de 2012, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, en forma conjunta e inaudita, mediante Ordinario Nro. 416, de 15 de enero de 2013, el Sr. Fernando Fondón Rojas, Jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitó a la Directora del SERVIU de entonces, doña María Pérez Pizarro, la exclusión y reemplazo de los demandantes por otras 22 personas, lo cual fue acogido y se materializó a través de la Resolución Exenta Nro. 9191, de 12 de diciembre de 2013.

Indica que en dicha resolución se adecuó simplemente el listado original de los 140 beneficiarios por “otros 140”, privando a sus representados del subsidio que les fuese originalmente otorgado por un monto total de 672 Unidades de Fomento a cada uno. Añade que como si ello no fuese suficiente, tampoco se les restituyó el monto de su ahorro para la vivienda y menos sus aportes para la adquisición del terreno, todo lo cual, en promedio, asciende a unas 200 Unidades de Fomento por cada demandante.

Afirma que esta situación no concluyó allí y de hecho aún persiste pues en los registros del SERVIU sus representados siguen estando “informados” como beneficiarios de un subsidio habitacional “vigente” pese a que, como se probará, **nunca pudieron hacer uso ni provecho** de dicho financiamiento estatal, impidiéndoseles al día de hoy al tratar de hacer otras postulaciones a través de Municipio o directamente en el SERVIU Metropolitano.

## **II. Fundamentos de Derecho.**

Alega que la falta de servicio ha sido definida doctrinaria y jurisprudencialmente como aquella en que el servicio -esto es, un órgano de la Administración del Estado- actúa mal, lo hace tardíamente o no actúa. Lo fundamental de esta concepción es comprender que constituye un factor de atribución general de la responsabilidad patrimonial de la Administración, vale decir, el fundamento jurídico en cuya virtud los costos de los daños sufridos por un particular son asumidos por aquella.



Foja: 1

Señala que así lo ha sostenido la doctrina, entre ellos, el profesor Pedro Pierry: "(...) *la falta de servicio, a nuestro juicio, constituye el sustento esencial de la responsabilidad del Estado y de la legalidad de la actuación de la Administración*" (La Responsabilidad Contractual del Estado por Falta de Servicio, Adaptación de artículos por el mismo autor en Revista de Ciencias Jurídicas N° 5, Valparaíso 1975. Anuario de Derecho Administrativo N° 1 Universidad de Chile, Santiago 1975-1976. Ediciones Revista de Derecho Público. Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCII N° 2 mayo-agosto 1995. Revista de Derecho Público Universidad de Chile N°59 enero-junio 1996). En ese mismo sentido, el profesor Luis Cordero, quien profundiza exponiendo que la falta de servicio debe entenderse como un "*incumplimiento en el funcionamiento normal del servicio, de modo que es una noción autónoma que está vinculada al carácter material y jurídico del acto singular o general, independiente de la legalidad del acto y con indiferencia de sus efectos penales*". (Cordero Vega, Luis. (2015). *Lecciones de Derecho Administrativo*. Legal Publishing, p. 697).

Arguye que esta noción de falta de servicio, por lo demás, tiene su reconocimiento legal. Así, el artículo 42 del DFL Nro. 1 de 2001, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que: "*Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio*". Igual precepto está contenido en el art. 152 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; y en el art. 38 de la Ley 19966, que establece un régimen de garantías en salud.

Aduce que, en la especie, se le reprocha a la demandada, por una parte, el haber privado a sus representados de su subsidio habitacional y, particularmente, de la vivienda que ya se encontraba asignada y construida; a la vez que dicha privación aún persiste, impidiendo a sus representados poder acceder a otro por una mera falta de servicio del SERVIU Metropolitano.

Enseguida, procede a citar al profesor Enrique Barros Bourie: "*Sin perjuicio de esas especiales condiciones de responsabilidad de la Administración del Estado y de las municipalidades, el complejo ordenamiento de la responsabilidad extracontractual actúa como estatuto general y supletorio en las materias que no son objeto de conceptos y reglas especiales de derecho público*" (Barros Bourie, Enrique. (2010). *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*. Editorial Jurídica de Chile, p. 483).

En cuanto a la procedencia de la acción, hace presente que suelen referirse como requisitos para la responsabilidad extracontractual, la capacidad del autor del hecho ilícito, la imputabilidad, el nexo causal entre la conducta o el hecho y los



Foja: 1

resultados dañosos y, por último, la existencia de daños. En este caso, y tratándose de responsabilidad de órganos de la Administración del Estado, la “capacidad” está fuera de toda duda y se ha entendido tiene que ver más bien con el ámbito de la competencia.

Asevera que no hay lugar a dudas que el SERVIU Metropolitano es un órgano competente, tanto en su función como territorialmente hablando. Luego, la “imputabilidad” para estos casos se ha asimilado a la falta de servicio, sobre la que ya se ha referido anteriormente, añadiendo que son controvertidos el nexo causal y la existencia de daños, esto último objeto de la prueba a rendirse.

Expresa que el subsidio otorgado a sus representados fue específicamente para la construcción de un proyecto determinado y no para un uso “general”, “masivo” o “indeterminado” para la adquisición de cualquier otra propiedad. Aclarado ello, y si se guía únicamente por el monto original de su otorgamiento, esto corresponde a **672 Unidades de Fomento**. Empero, ello no es suficiente, pues debe también tomarse en cuenta que solo el avalúo fiscal de los departamentos asciende a 700 Unidades de Fomento, monto que es de público conocimiento es siempre menor al valor comercial del inmueble en cuestión, el que su parte ha estimado en 1000 Unidades de Fomento.

Manifiesta que indudablemente el actuar incorrecto y contrario a los deberes que le impone la normativa vigente al SERVIU Metropolitano y que se materializó del modo ya expresado, permite afirmar que en este caso se verifican cada uno de los elementos que tanto la jurisprudencia como la doctrina han establecido a propósito del requisito de causalidad o “nexo causal”, común a cualquier tipo de responsabilidad. Ciertamente, en la doctrina se ha caracterizado por dos aspectos que son el empírico y el normativo y ambos concurren en este caso. En palabras del profesor Enrique Barros: *“el aspecto natural que se expresa en una relación empírica de causa a efecto entre el hecho y el daño; y el aspecto normativo que se expresa en la exigencia de que exista una relación de suficiente proximidad entre ambos”*

Además, destaca que existe uniformidad en que la satisfacción de los daños extrapatrimoniales procede tanto en sede contractual como extracontractual, y que estos siempre deberán ser acreditados por el actor. En consecuencia, de los ilícitos que se han narrado en su presentación, han afectado los intereses jurídicamente protegidos de sus representados, por lo que, en virtud de lo anterior, se demanda, a título de indemnización del daño emergente sufrido, la cantidad de 672 Unidades de Fomento y, como lucro cesante, 328 Unidades de Fomento, totalizando 1000 Unidades de Fomento para cada uno de los demandantes; o bien la cantidad que se determine de acuerdo al mérito de autos,



Foja: 1

más las costas de la causa; todo ello en razón que la parte demandada privó a sus representados del departamento mediante un acto administrativo posterior y, aún hoy, les impide acceder a un inmueble y satisfacer su necesidad habitacional por tanto tiempo postergada.

Por tanto, con el mérito de lo anteriormente expuesto, normas legales citadas y las demás que sean aplicables, pide se tenga por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en juicio ordinario de mayor cuantía, contra el **SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA (SERVIU)**, ya individualizado, y condenarle al pago por la suma de 22000 UF (veintidós mil Unidades de Fomento), en razón de 1000 (mil) Unidades de Fomento para cada demandante, o la cifra que se aprecie conforme a derecho y al mérito de autos, más costas.

**A folio 12, con fecha 14 de marzo de 2023**, se notificó al demandado en conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, con fecha 10 de marzo de 2023.

**A folio 19, con fecha 22 de junio de 2023**, comparece don Danilo Rojas Sepúlveda, abogado, en representación de **SERVIU Metropolitano** y contesta la demanda, solicitando su rechazo, con costas.

#### **I. HECHOS EN QUE SE FUNDA LA DEMANDA.**

1.- Expone que, de acuerdo al relato de los hechos realizado en el libelo pretensor, los demandantes postularon de manera colectiva a un subsidio habitacional, para la construcción de *“150 departamentos de calidad superior a los que tradicionalmente se han construido”*, aprobado por Resolución N°7081, otorgándose UF 672 para 140 familias.

2.- Hace presente que la acción NO identifica el nombre del proyecto, ni tampoco su dirección, limitándose a señalar que los demandantes formaban parte de un Organización Funcional de la Ley 19.418, denominado “Comité de Allegados Poeta Pablo Neruda”, y que éste había postulado a un subsidio.

3.- Continúa señalando que el proyecto experimentó problemas atribuibles a la empresa constructora y a la Entidad Patrocinante del proyecto, que dilataron su fecha de término.

4.- Por último, identifica el reproche realizado al SERVIU, que consistente en la exclusión de los 22 demandantes del proyecto, por Resolución N°416, y que hasta la fecha siguen apareciendo como beneficiarios de subsidios habitacionales.

**II. Sobre los procesos de postulación colectiva al Programa del Fondo Solidario de Elección Vivienda (“FSEV”) del MINVU, y los procesos de exclusión.**



Foja: 1

5.- Explica que, conforme al **DS 174 (V. Y U.)** de 2005, que reglamentan el Programa Fondo Solidario de Vivienda ("**FSV**"), y al cual adscriben los actores, los procesos de postulación al subsidio, cuando son realizados en la modalidad colectiva, como ocurre en el caso, son llevados adelante materialmente por "comités de vivienda" en calidad de "postulante".

6.- Por lo tanto, la postulación es realizada por un colectivo u organización funcional, o también llamadas organismos comunitarios, reconocidas y creadas al amparo de la Ley N°19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, y los subsidios son otorgados a los miembros de ese Comité, mientras sean socios de este, y cumplan con los demás requisitos que el programa establezca.

7.- Agrega que, de acuerdo a los estatutos del comité, se establecen deberes y obligaciones que deben cumplir sus asociados para su permanencia, que tienen que ver, por lo general, con asistencia a asambleas y pagos de cuotas mensuales.

8.- Luego, en el caso de infracción a los estatutos por parte de algún socio, el órgano máximo del comité, que se encuentra representado por la **Asamblea de Socios** se encuentra facultada para excluir al asociado del grupo organizado o comité, por medio de un procedimiento reglado en sus propios estatutos y la anotada Ley N°19.418.

9.- Alega que los procesos de exclusión de un comité, y solo cuando se encuentren asociados a un proyecto habitacional, financiados en parte con subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, son controlados por los SERVIU, ya que los efectos de la exclusión se producen también en la postulación al subsidio, que como señaló es de carácter colectiva, y para ser titular del subsidio otorgados al Comité se debe formar parte del grupo organizado beneficiado.

10.- Sostiene que, atendido el carácter autónomo y resolutivo de las Asambleas de Socios de un Comité, el control practicado por SERVIU se limita a revisar únicamente sus aspectos formales, sin que el Servicio pueda calificar o referirse al mérito, conveniencia u oportunidad de la decisión adoptada.

11.- Enseguida, habiéndose materializado la exclusión, y revisada favorablemente en sus aspectos formales por el SERVIU, y a solicitud de los Comités, se dicta la Resolución de Exclusión de beneficiarios de la nómina original del proyecto.

12.- De este modo, advierte que la **Asamblea de Socios** es un órgano resolutivo y autónomo para determinar quienes forman parte del Comité, y que las exclusiones producidas en Asamblea pueden producir efectos en una postulación



Foja: 1

colectiva a un subsidio, ya que es requisito para acceder al beneficio, conforme al artículos 2 y 50 del DS 174 de 2005, ser parte de dicho Comité.

### III. Sobre el proceso de exclusión de las demandantes.

13.- Sobre el particular, señala que el libelo pretensor reprocha la exclusión de las 22 demandantes (demanda retirada respecto a dos de ellas), lo que fue formalizado por medio de Asamblea Extraordinaria de Socios del Comité del proyecto "Pablo Laurín" de fechas, 19 de enero y 2 de diciembre ambas de 2012.

14.- Luego, relata que el proceso de exclusión fue presentado a la Subdirección Jurídica para su control, de lo que da cuenta los Oficios Ordinarios N°1805 de 10 de septiembre y N°2440 de 27 de diciembre, ambos de 2012, del Departamento Jurídico de este SERVIU, en que se puede advertir que el control practicado se limita a aspectos formales, y se hace expresa prevención que no se practica una revisión del fondo de las exclusiones, atendido el carácter autónomo y resolutivo de la Asamblea de Socios del Comité.

15.- Ahonda que los procesos de exclusión, sin perjuicio de llevarse adelante ante un órgano autónomo, independiente y resolutivo, que como señaló corresponde a una Asamblea de Socios de un comité para la vivienda; estos procesos son controlados por SERVIU RM, cuando producen efectos en una postulación colectiva ya afinada a un subsidio habitacional, que en este caso corresponden al Proyecto "Pablo Laurín" de la comuna de San Ramón.

16.- Continúa indicando que el efecto de la exclusión de las recurrentes del comité para la vivienda, también produce efectos en su postulación al subsidio habitacional regulado en el D.S. 174 (V. y U.) 2005, e implica la eliminación del postulante del proyecto de viviendas, ya que respecto a aquel no concurre algunos de los requisitos para acceder al beneficio, que, **en el caso de postulaciones colectivas** como ocurre en el caso sub judice, **es requisito precisamente formar parte del comité respectivo.**

17.- Expone que el ejercicio de control de los procesos de exclusión vía Asamblea de Socios es realizado por el SERVIU de manera estandarizada y general, evitando caer precisamente en el capricho y la arbitrariedad, y se limita a revisar aspectos formales, como: la vigencia del comité y de su directiva, sus integrantes conforme al libro de socios, constancia de la citación del socio objeto del proceso de exclusión indicándole las razones y/o infracciones que se le atribuyen, copia de los antecedentes que den cuenta de la investigación de los hechos que motivan la exclusión y como se desarrolló el proceso en la Asamblea, finalizando con el acta, los quórums y votos a favor de la exclusión.

18.- Arguye que atendido el carácter "asambleísta" de la decisión de exclusión que afecta a las recurrentes, el estándar de revisión del proceso se





Foja: 1

agota a aspectos únicamente formales y adjetivos, y no se extiende a calificar los descargos, antecedentes y pruebas aportadas por las recurrentes en dicha instancia, atendido a que la **Asamblea de Socios es un órgano autónomo, soberano y resolutivo**, sin que el SERVIU pueda referirse sobre el mérito, conveniencia u oportunidad de la decisión de exclusión.

19.- Seguidamente, habiéndose agotado la revisión del proceso de exclusión por el Departamento Jurídico sin observaciones, de lo que da cuenta el Oficio Ordinario N°1805 y N°2440 ambos de 2012, es dictado el Oficio Ordinario N°416 de 15 de enero de 2013, que solicita a la División de Política Habitacional ("DPH") que modifique la nómina original de beneficiarios del proyecto "**Pablo Laurín**", en la alternativa de postulación colectiva para proyectos de construcción en nuevos terrenos del programa fondo solidario de vivienda.

20.- Consigna que todos esos actos administrativos citados, que podrían identificarse como el objeto del reproche al SERVIU, todos **datan de hace más de 10 años**, lo que revela de manera elocuente la extensión de toda eventual responsabilidad dirigida en contra del Servicio.

#### **IV. Negación de los hechos en que se funda la demanda.**

21.- En primer lugar, rechaza en forma categórica todos y cada uno de los hechos señalados por la contraria de la forma en que han sido planteados, salvo aquellos que sean expresa y formalmente reconocidos por su parte, pesando sobre los demandantes la prueba de sus afirmaciones.

22.- Por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.698 y 2.314 ambos del Código Civil, será carga de la contraparte probar conforme a derecho, la veracidad y exactitud de los hechos en que sustenta sus acciones en contra de SERVIU Metropolitano.

#### **V. Excepciones, alegaciones y defensas.**

##### **a. Sobre la prescripción de la acción indemnizatoria.**

23.- Señala que su contradictor interpuso acción de indemnización de perjuicios en contra del SERVIU Metropolitano, por los supuestos daños que habrían experimentado los demandantes por la exclusión del proyecto Pablo Laurín, de la comuna de San Ramón

24.- Alega que de acuerdo a lo indicado en las normas que gobiernan este especie de responsabilidad civil, en los artículos 2.314 y siguientes del Código Civil, para ser civilmente responsable desde un punto de vista extracontractual, y en definitiva ser obligado a reparar el mal causado, es necesario que concurren los siguientes requisitos copulativos: 1) Una acción u omisión de parte de infractor; 2) Que la acción en cuestión produzca daño en la persona o propiedad de otro; 3)



Foja: 1

Que esa acción que causa daño sea imputable a dolo o culpa del infractor; y 4)

Una relación de causalidad entre el dolo o culpa y el daño causado.

25.- Agrega que nuestra doctrina ha entendido, además, en cuanto a la responsabilidad extracontractual del Estado, sin que consista en un régimen excepcional o alternativo, que existe falta de servicio cuando el Estado ha actuado mal (acción u omisión de parte del infractor), y por ende, ha incurrido en responsabilidad, en las siguientes hipótesis: 1) El Servicio no actuó debiendo hacerlo; 2) El Servicio actuó, pero lo hizo de mala forma; y 3) El Servicio actuó tardíamente.

26.- En este sentido, acusa que los demandantes señalan en términos generales e inespecíficos, que su pretensión indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual se sustenta en los procesos de exclusión que estima han vulnerado sus derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, reprochándole a este Servicio haber emitido el **Oficio Ordinario 416 de 15 de enero de 2013** conforme al cual se formaliza la solicitud de exclusión de las demandantes a la DPH.

27.- Indica que las acciones que se ejercen ante los Tribunales de Justicia deben ser ejercidas dentro del tiempo que el legislador estimó como prudente para su interposición. Lo anterior, tiene plena justificación si se considera que todo el Ordenamiento Jurídico debe garantizar la seguridad a las partes respecto de los plazos en que pueden ser sujetos activos o pasivos de una acción judicial, consolidándose una determinada situación.

28.- A continuación, cita el artículo 2.492 del Código Civil, que establece que *“La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción”;*

29.- por su parte el artículo 2.514 del mismo cuerpo legal, que dice lo siguiente: *“La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”.*

30.- Alude que, de la lectura de la norma citada, no cabe duda que el cómputo de la prescripción extintiva se inicia en la fecha exacta en que se consumó el hecho generador del daño, no antes ni después, que en este caso, es la época en que se manifestó el daño que alegan los demandantes y que sirve de sustento de su acción indemnizatoria, esto es la exclusión del Comité de Vivienda Pablo Neruda, perdiendo su calidad de asociados y en consecuencia, de beneficiarios del subsidio habitacional.



Foja: 1

31.- Luego, el artículo 2332 de nuestro Código Sustantivo, previene que el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria interpuesta es de 4 años contados desde la perpetración del acto y la manifestación de sus efectos, que de acuerdo a lo establecido por la propia parte demandante, habrían ocurrido en 2012 (Exclusiones por Asamblea) y 2013 con el acto administrativo que reconoce dicha sanción de desvinculación de los asociados del Comité Pablo Laurín, de forma que la acción interpuesta por la contraparte se encuentra prescrita, toda vez que el régimen de responsabilidad civil aplicable en la especie es extracontractual, y atendido lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, el plazo de prescripción de la acción es de cuatro años contados desde la perpetración del acto, debiendo así declararse.

**VI. Contesta demanda de responsabilidad civil extracontractual, por falta de servicio.**

32.- Sobre la no concurrencia de los requisitos para que opere la responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio.

33.- Constando que no son tales las acciones u omisiones imputadas a su representada, sostiene que será carga de la parte demandante conforme a lo dispuesto en los artículos 2314 y 1698 del Código Civil, probar todos los elementos de la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por falta de servicio que invoca; cuestión que en definitiva no podrá acreditar, en atención que no se cumplen con los requisitos exigidos para aquello:

**34.- i) Ausencia de “falta de servicio” de SERVIU Metropolitano o la antijuridicidad de su actuar.**

35.- Señala que de acuerdo a lo indicado por la doctrina, la “falta de servicio” es el régimen general de responsabilidad extracontractual de la Administración del Estado, y está establecida, de manera general, en el artículo 42 de la Ley N°18.575, cuyo único efecto en particular es que sin derogar o sustituir las normas de derecho común sobre responsabilidad civil extracontractual, introduce para el específico caso de la responsabilidad del Estado el concepto de “falta de servicio”, en términos tales, que el elemento subjetivo del dolo o culpa debe atribuirse no ya a un determinado agente público sino al respectivo órgano o servicio.

36.- En otras palabras, la falta de servicio quiere decir que el Servicio Público que representa, en condiciones normales de funcionamiento y estando obligado legalmente a actuar, supuestamente no habría funcionado en absoluto, o lo habría hecho deficiente o tardíamente, por dolo o culpa, cuestión que en los hechos no ocurrió como explicó.



Foja: 1

37.- Alude que la responsabilidad por falta de servicio exigía al demandante calificar de defectuoso el funcionamiento de SERVIU Metropolitano, lo que suponía comparar el servicio efectivamente prestado con el que se debió ejecutar por el órgano de la Administración del Estado, síntesis que no se encuentra en el libelo presentado por la demandante; ya que no existe un desarrollo argumental para acreditar que la actuación del Servicio haya sido defectuosa, ni tampoco que estas supuestas actuaciones u omisiones arbitrarias y descuidadas del SERVIU Metropolitano en sus actos administrativos sean la causa de un perjuicio a su patrimonio, sino más bien todo lo contrario, ya que como latamente explicó, los procedimientos de exclusión por Asamblea de Socios son llevados adelante de manera autónoma e independiente de SERVIU, limitándose este último a practicar un ejercicio de control adjetivo, sin inmiscuirse en aspectos de fondo, mérito, pertinencia, u oportunidad de la decisión del grupo organizado, no advirtiéndose de los actos administrativos reprochados un actuar torcido, caprichoso o ilegal de parte de la repartición Estatal.

38.- Por consiguiente, aduce que no existiendo reproche en ninguno de los estadios del procedimiento de exclusión, cuyo control se encuentre dentro de la esfera de competencia del Servicio, la responsabilidad reprochada por el libelo pretensor no se basta por sí misma para configurar la antijuridicidad en el actuar de SERVIU, y menos aún, una supuesta falta de servicio, ya que de los actos administrativos que dan cuenta de este procedimiento de exclusión, queda absoluta trazabilidad de todo lo contrario, esto es, un irrestricta y apegada sujeción al principio de legalidad y juridicidad del actuar administrativo.

**39.- ii) Ausencia de daño.**

40.- Procede a controvertir y negar que exista algún perjuicio experimentado por los actores a causa de su exclusión como socios del Comité Pablo Neruda, siendo la contraria quien deberá acreditar los hechos en que se basa su demanda y la referida existencia, naturaleza y monto de los presuntos daños.

41.- Hace presente que el daño, para que sea indemnizable, debe ser cierto, es decir, existir y ser real, lo que no se aprecia en el caso de marras bajo ningún supuesto, atendido a que, la circunstancia de ser beneficiario de un subsidio no otorga otros derechos que la expectativa de acceder al beneficio habitacional cuando materialmente se encuentre construido, **siempre y cuando el o los beneficiarios den cumplimiento a los requisitos para acceder a él**, y como señaló, los demandantes no tienen la calidad de asociados al Comité Pablo Neruda, asociado al proyecto Pablo Laurín de San Ramón, máxime que esa es la causa de pedir de su acción.



Foja: 1

42.- Precisa que el daño emergente demandado, constituye el detrimento patrimonial que efectivamente experimentó la demandante, sin embargo, como consta en el libelo pretensor, la contraria no explica de por qué las demandantes se estiman propietarias del subsidio habitacional, la que uno puede suponer proviene por la sola circunstancia de haber pertenecido a un Comité beneficiado, sin embargo, no existe una retórica que explique de qué manera ese germen de expectativa se convierte en un derecho patrimonial que merezca tutela por el ordenamiento jurídico.

43.- En cuanto a un supuesto daño moral, afirma que no existe una relación que permita confrontarlo argumentativamente, ya que no se advierte de que manera se ha afectado extrapatrimonialmente a los actores, pudiendo nuevamente suponer que se ha limitado a fijar una cifra de manera artificial para llegar a las 1.000 UF por cada demandante, razón por la cual señala que es inexistente.

**44.- iii) No habiendo falta de servicio ni daños, no hay relación de causalidad.**

45.- Evidencia que, al no configurarse los requisitos necesarios que establece la ley, relativos a la responsabilidad extracontractual civil, no corresponde indemnización alguna. En efecto, al no haber una conducta reprochable, tampoco se configura la relación de causalidad necesaria para demandar civilmente daños y perjuicios por falta de servicio.

46.- Añade que dichas exigencias son propias no sólo del régimen de responsabilidad por daños del Estado, sino de toda responsabilidad extracontractual, incluyendo el caso de responsabilidad subjetiva común del Código Civil y el de todos aquellos especiales que, por excepción y no siendo éste el caso, algunas legislaciones han dispuesto auténticamente con el carácter de objetiva.

47.- Por consiguiente, estima que, no habiéndose cumplido los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, solicita rechazar la presente acción, con costas.

#### **VII. Breve comentario sobre lo señalado a la “marca de beneficio”.**

48.- Por último, refiere que el apoderado de los demandantes señala, como argumento circunstancial, de que hasta la fecha sus patrocinados siguen apareciendo informados en SERVIU como beneficiarios, situación que les impide acceder a los distintos programas habitacionales vigentes en nuestro país.

49.- Al respecto, señala que los subsidios habitacionales que permiten adquirir una vivienda nueva o usada, son incompatibles con otros programas que permitan adquirir o construir una vivienda, ya que estos beneficios son otorgados por una única vez por familia.



Foja: 1

50.- De ese modo, una familia beneficiaria de un subsidio habitacional aplicado en la adquisición de una vivienda, queda con una “marca de beneficio” en la plataforma del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, denominado RUKAN, los que sirve de herramienta para filtrar a aquellas familias que cuenten con una solución habitacional de las postulaciones que son presentadas.

51.- Sobre el particular, y de ser efectiva la afirmación realizada por los demandantes que se encuentran afectos a una marca de beneficio, observa que todos ellos pueden acceder a solicitar su eliminación del registro por medio del trámite denominado “borrado de marca”, el que es realizado a solicitud de los interesados en las distintas Oficinas de SERVIU en la Región.

52.- Es más, en caso de divorcio o nulidad matrimonial, dicho trámite puede ser realizado en línea, en el sitio del Ministerio, en su apartado “atención ciudadana”.

53.- Por lo tanto, la circunstancia de aparecer en los registros del Ministerio con una marca de beneficio no es óbice o impedimento para postular a los programas habitacionales o de mejoramiento vigente, debiendo realizar el trámite de borrado de marca acompañando el Oficio Ord. 416 de 2013 objeto del reproche en este juicio.

#### **VIII. Conclusiones.**

54.- Sostiene que la demanda se funda en las exclusiones de 22 personas que formaron parte del Comité Poeta Pablo Neruda, decisión que fue adoptada de manera soberana e independiente por la Asamblea de Socios de dicho grupo organizado.

55.- Luego, al estar ese Comité adscrito a un proyecto habitacional, dichas desvinculaciones fueron controladas por el SERVIU, con el objeto de resguardar el cumplimiento de las normas estatutarias y de la Ley N°19.418, y el resguardo de los derechos y garantías ciudadanas de los afectados por dicha decisión.

56.- Agrega que, resultado del examen del proceso de exclusión vía Asamblea de Socios, el SERVIU por medio de los Oficios Ordinarios N°1805 y N°2440 ambos de 2012 del Departamento Jurídico, da su opinión jurídica favorable a los procesos de exclusión, dictándose en consecuencia el Oficio Ordinario N°416 de 15 de enero de 2013, que solicita a la División de Política Habitacional (“DPH”) que modifique la nómina original de beneficiarios del proyecto “**Pablo Laurín**” y el reemplazo de los beneficiarios excluidos.

57.- Manifiesta que el libelo pretensor funda su reproche analizando la exclusión desde su dimensión de resultado, el que evidentemente no es compartido por los actores, sin embargo, su argumentación al estar limitada al



Foja: 1

resultado adolece de omisiones graves del proceso que la tornan artificial y caprichosa.

58.- En efecto, explica que para arribar al resultado de la exclusión se tuvo que agotar procesos internos en el respectivo comité (citaciones, asambleas, descargos, votaciones) y administrativos en SERVIU (Oficios que dejan trazabilidad de lo obrado) respecto a los cuales no existe constancia de recursos administrativos o judiciales que pudieran haber suspendido el plazo de prescripción que claramente se encuentra cumplido respecto a esta acción.

59.- Enseguida, sin perjuicio de la evidente prescripción de la acción indemnizatoria, razón suficiente para rechazar esta demanda, es lo relacionado a la no concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, los cuales no han sido siquiera identificados por el actor, que como se indicó, se ha limitado únicamente a hacer un reproche de resultado, sin revisar el proceso que se agotó para excluir a los demandantes, yerro que afecta la delimitación de la competencia específica del tribunal, razonamiento que supone es compartido hasta cierta parte por el tribunal, al estimar que su parte ha tenido motivos plausibles para litigar las excepciones dilatorias opuestas.

60.- De ese modo, concluye que no habiendo concurrencia de los elementos de la responsabilidad extracontractual, esta acción tampoco podrá prosperar.

Por tanto, pide tener por contestada la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, interpuesta por el señor **LUIS ALBERTO CELEDÓN MIRANDA**, en representación de 22 personas (retirada respecto a dos de ellas) en contra de su representada SERVIU Metropolitano, disponiendo el rechazo de dichas acciones en todas sus partes por los motivos consignados, con costas.

**A folio 21 con fecha 4 de julio de 2023** la parte demandante replica exponiendo:

Que, en su contestación, la demandada describe sucintamente la modalidad de funcionamiento del Programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV) reglado por el Decreto Supremo 174 de 2005, de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, en su descripción, deslinda de modo difuso -tal y como ocurrió en la realidad misma con la aplicación de este programa- qué papel cumplió el Estado, a través de sus órganos especializados (MINVU/SERVIU) y los cuerpos sociales o intermedios, que para lo específico adoptaron (y aún hoy) la denominación de "Comité de Allegados".

Precisa que la demandada explicita que su Servicio efectuó un "control"; utiliza las expresiones, y cita: *"los procesos de exclusión de un Comité (...) son*



Foja: 1

*controlados por los SERVIU, ya que los efectos de la exclusión se producen también en la postulación al subsidio*". No obstante, en el punto 10 de la página 3, alude a que dicho control sería únicamente sobre "aspectos formales", y cita: "*sin que este Servicio pueda calificar o referirse al mérito, conveniencia u oportunidad de la decisión adoptada*", cuestión que pugna con toda noción de control y, ciertamente, de las obligaciones que tienen los órganos del Estado en la revisión de los actos que emana, especialmente cuando se refiere a la comunidad y tiene efectos, precisamente, en parte de esa comunidad.

Alega que la revisión formal no fue tal, ya que, como probará, el SERVIU dictó una resolución que excluyó a las demandantes sin advertir ni tomar medida alguna sobre los fondos disponibles en sus cuentas de ahorro para la vivienda, que fueron giradas por la empresa constructora de los departamentos, ni en resolver la necesidad de vivienda social. Refiere que esto último no es caprichoso, pues precisamente la postulación del proyecto "Pablo Laurín" empezó en 2005 y se entregaron los departamentos casi diez años después.

Sostiene que el Servicio, en consecuencia, se desentiende de los efectos perniciosos que tuvo la exclusión, y aún más ni siquiera revisó los antecedentes mismos de la organización comunitaria funcional ("Comité de Allegados Poeta Pablo Neruda", de San Ramón), la cual no contaba con libros de actas ni composición ni estatutos vigentes ante la Iltrma. Municipalidad de San Ramón, entre otras deficiencias que probará en su oportunidad. Vale decir, aún en el supuesto de una "revisión formal", esta tampoco cumplió un mínimo exigible a cualquier organismo del Estado.

Luego, explica que el Servicio omite que, al menos a la época de este proyecto, contaba con asesores -funcionarios propios- encargados de gestionar, coordinar y asistir a las organizaciones comunitarias en esta clase de postulaciones. Señala que como acreditará en la oportunidad procesal respectiva, el Servicio estaba al tanto de estas "deficiencias" en el Comité y no hizo nada al respecto.

Por tanto, alude que la falta de Servicio se configura en la diferencia entre lo efectivamente obrado por el órgano del Estado y el cómo debió actuar. Desde luego, no sólo teniendo a la vista la normativa específica, como es la de vivienda y urbanismo, sino las disposiciones generales aplicables a la Administración del Estado, sus procedimientos y principios que configuran lo que se conocen como Derecho Administrativo.

Indica que en su párrafo VII, la demandada señala que la "marca de beneficio" sería una cuestión meramente circunstancial y, nuevamente, se desentiende de la responsabilidad del Servicio, atribuyendo la carga a los propios





Foja: 1

expulsados. Sin embargo, no existe procedimiento “aclaratorio” disponible ni presencialmente ni a través de las distintas páginas web del MINVU/SERVIU, por lo que malamente podría exigirse a sus representados que solicitaran la eliminación de un antecedente que el propio SERVIU utiliza para la concesión o no de beneficios, etc.

**A folio 23 con fecha 20 de julio de 2023** el demandado duplica ratificando lo señalado en su contestación.

Sin perjuicio de lo señalado respecto a la **prescripción de la acción indemnizatoria incoada**, respecto a lo cual acusa que el actor NO se hace cargo en su réplica, rescata lo indicado en su numeral 4, donde se evidenciaría con prístina claridad de que el reproche realizado al Servicio es revisado únicamente desde su dimensión de resultado (la exclusión del socio del comité), al señalar que el control formal a los procesos de exclusión que es realizado por el SERVIU *“pugna con toda noción de control y, ciertamente, de las obligaciones que tienen los órganos del Estado en la revisión de los actos que emana, especialmente cuando se refiere a la comunidad y tiene efectos, precisamente, en parte de esa comunidad.”*

De ese modo, alega que al cuestionar el actor el control formal al proceso de exclusión en Asamblea de Socios practicado por el Servicio que representa, implicaría admitir un argumento que cuestiona las prerrogativas que el Estado se reserva, estimando, por un lado, que no fueron ejercidas o se ejercieron de una mala forma, y por el otro, que existirían vicios internos en el comité y su Asamblea de Socios que el SERVIU debería haber conocido en virtud de esas mismas prerrogativas o facultades.

Empero, manifiesta que dicho argumento se estrella con la normativa que regula al comité de vivienda que formaban parte los demandantes (Ley 19.418), y sus propios estatutos, que no establecen regla alguna que faculte a los SERVIU o sus antecesores a tener un rol como interviniente en la toma de sus decisiones, como pareciera entender el actor.

Concluye que no contando el SERVIU con prerrogativas expresamente otorgadas por los socios del comité para revisar exhaustivamente el proceso de exclusión objeto del reproche, se encuentra impedido de inmiscuirse en asuntos de mérito, conveniencia u oportunidad de otro órgano intermedio, los que son autónomos conforme a nuestro Pacto Político, no pudiéndose atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Por último, en relación a lo señalado a los ahorros de los demandantes y la marca de beneficio, reitera que, habiendo sido excluidos conforme a la Ley, es



Foja: 1

necesario que los interesados desplieguen las acciones respectivas en el Servicio o en sus oficinas provinciales, si es del caso de que existan ahorros no devueltos o marcas pendientes de eliminación, circunstancias que no son óbice para postular a los programas financiados por el MINVU y ejecutados por los SERVIU a nivel nacional.

**A folio 30, con fecha 26 de septiembre de 2023,** se efectuó la audiencia de conciliación, oportunidad en que no se produjo acuerdo.

**A folio 32, con fecha 10 de octubre de 2023, modificada a folio 37, por resolución de fecha 10 de enero de 2024,** se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

**A folio 44, con fecha 19 de marzo de 2024,** se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, a folio 1, rectificado a folio 6, compareció don Luis Alberto Celedón Miranda, en representación de (1) doña Sonia Graciela Gallegos Muñoz, (2) doña Tatiana Idalia Briones Gallegos, (3) doña María Gladys Valenzuela Cisterna, (4) doña María Eulalia Martínez Salcedo, (5) doña Silvia Del Carmen Lagos Pulgar, (6) doña Marisol Del Pilar López Figueroa, (7) doña Erika del Rosario Espinoza Allende, (8) doña Eliana Helvia Matus Naranjo, (9) Ana Georgina Oteíza Vergara, (10) doña Angélica Lucía Farías Martínez, (11) doña Angélica Jeannette Tapia Vásquez, (12) doña Sussy Del Carmen Oteíza Vergara, (13) doña Elizabeth Marisol Riquelme Flores, (14) doña Marcela Carmen Maldonado Alegre, (15) don Fabián Segundo Manquela Pichulmán, (16) don Rafael Ernesto Londoño Briones, (17) doña Camila Yasmín Londoño Briones, (18) don Raúl Sebastián Vera Castillo, (19) doña Marjorie Solange Millán León, (20) doña Juana Del Carmen Collinao Valenzuela, (21) don Abelino Segundo Latorre Moya, y (22) doña Jocelyne Magdalena Rubilar Sánchez; todos ya individualizados, quienes interpusieron demanda de indemnización de perjuicios en contra del SERVIU METROPOLITANO, todos ya individualizados.

Al efecto, cimentó su pretensión en los fundamentos de hecho y de derecho ya referidos en lo expositivo.

**SEGUNDO:** Que, el demandado contestó la demanda solicitando su total rechazo, conforme los argumentos ya expuestos en el exordio de esta sentencia.

**TERCERO:** Que, en primer término, corresponde determinar el marco jurídico aplicable con el fin de establecer las cargas probatorias de las partes.

Al respecto, conviene recordar que el artículo 6° de la Constitución Política de la República dispone que: *“Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden*



Foja: 1

*institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.”*

A continuación, el artículo 7° de la Carta Fundamental establece que: “*Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.*”

Por otro lado, el artículo 2° de la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado N°18.575 establece: “*Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.*”

**CUARTO:** Que, las normas recién transcritas forman parte de los fundamentos normativos de la responsabilidad del Estado, consagrando lo que se ha denominado principio de legalidad, el que implica la sujeción de los órganos del Estado a la Constitución y las leyes, además de la sujeción formal a las competencias definidas por la ley. Se comprende, en las mismas normas, el expreso reconocimiento que su infracción acarreará responsabilidad, todo en conformidad a la ley.

**QUINTO:** Que, en concordancia con dichos preceptos, el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República dispone que: “*Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.*”

El ejercicio de este derecho permite a la jurisdicción ordinaria conocer y juzgar las acciones de resarcimiento fundadas en actos irregulares de la Administración.

Luego, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N°18.575, “*El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren*



Foja: 1

*afectar al funcionario que las hubiese ocasionado”; y, por su parte, el artículo 42 del referido texto legal dispone: “Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal”.*

**SEXTO:** Que, asentado así el marco normativo, cabe recordar que la responsabilidad por falta de servicio puede conceptualizarse como aquella en que incurre el Estado por un ejercicio defectuoso de su función pública, que se materializa en el incumplimiento, por parte de alguno de sus órganos, de los deberes de servicio que deben guiar su actuar, provocando consecuentes daños en los usuarios o destinatarios de esos servicios públicos.

Este incumplimiento de los deberes de servicio puede consistir en que no se preste el servicio, sea prestado tardíamente o sea prestado en forma defectuosa de conformidad con el estándar de servicio que el público tiene derecho a esperar. (Barros, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, p. 531).

El aspecto fundamental para establecer este tipo de responsabilidad, según este sistema, es que el acto sea objetivamente imputable a un funcionamiento anormal del servicio, no bastando una mera causalidad material, toda vez que siquiera en las hipótesis de responsabilidad estricta propiamente tal ésta resulta suficiente, porque en todo caso se exige que el daño sea atribuible normativamente al riesgo creado.

**SEPTIMO:** Que, “la culpa del servicio” deberá probarse por quien alega el mal funcionamiento del servicio, el funcionamiento tardío o el no funcionamiento del mismo; que esta omisión o acción defectuosa haya provocado un daño al usuario o beneficiario del servicio público de que se trata; y que la falla en la actividad del ente administrativo haya sido la causa del daño experimentado.

En el caso de autos, si bien lo reprochado por los actores es que el SERVIU les privó de un subsidio habitacional; añadiendo que dicha conducta persistiría en cuanto se encontrarían imposibilitados de acceder otros beneficios, lo cierto es que dicha circunstancia constituye el resultado de la acción, por lo que en definitiva, lo que corresponde acreditar es la conducta culposa, esto es, que el Servicio actuó en forma desviada o irregular al haber privado a los actores del subsidio habitacional.

**OCTAVO:** Que, conforme se viene razonando, la falta de servicio derivaría en que el SERVIU no actuó conforme el estándar de conducta que le era esperable, y que se traduce en que el otorgamiento del subsidio se encuentra ajustado o no a la normativa legal que regula la entrega de beneficios habitacionales.



Foja: 1

**NOVENO:** Que, en particular, la materia se encuentra normada principalmente por el Decreto Supremo N°174 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establece un programa de Fondo Solidario de Vivienda, que en su artículo 1° dispone que: *“El programa regulado por el presente reglamento está destinado a dar una solución habitacional preferentemente a las familias del primer quintil de vulnerabilidad. Tratándose del Programa Fondo Solidario de Vivienda II, regulado por el Capítulo Segundo, y de Proyectos de Construcción Colectiva en Zonas Rurales, estará destinado preferentemente a la atención de familias del primer y segundo quintil de vulnerabilidad”*. Luego, a tal programa se puede postular en forma individual o colectiva, definiéndose esta última, conforme el artículo 2 del precitado reglamento, como *“aquella que se realiza en forma grupal, con proyecto habitacional, a través de una EGIS”*.

Además, su artículo 4°, en cuanto a la calidad de los postulantes, señala que: *“Los postulantes deberán ser mayores de 18 años, nacionales o extranjeros, debiendo en este último caso contar con Certificado de Permanencia Definitiva, conforme a las normas que regulan la residencia legal de los extranjeros en el país, y además formar parte de un grupo organizado, con personalidad jurídica, en el cual los representantes del grupo deberán ser integrantes hábiles de las familias postulantes a este subsidio habitacional (...)”*

A su turno, el artículo 50 refiere al reemplazo de postulantes, estipulando que: *“con posterioridad a la selección y hasta antes del pago del último subsidio, se podrá reemplazar hasta el 10% del número total de postulantes que integran el grupo, debiendo hacerse devolución al SERVIU del respectivo Certificado de Subsidio acompañando carta de renuncia suscrita por el renunciante y con la firma del o de los representantes legales de la EGIS aceptando la renuncia, o copia autorizada del Acta de la Asamblea, debidamente aprobada de acuerdo a sus estatutos, en que conste la exclusión”*.

**DÉCIMO:** Que, de la normativa anteriormente revisada, fluye que el SERVIU se encuentra facultado para reemplazar a parte de los postulantes del programa de Fondo Solidario para la Vivienda, cumpliéndose los supuestos legales, entre ellos, la exclusión del socio por la Asamblea del grupo, para lo cual debe requerir el Acta en que se tomó tal decisión.

Con todo, pese a que el SERVIU no se encuentra facultado por ley para realizar un análisis de fondo de la decisión de exclusión, absteniéndose así de pronunciarse sobre los fundamentos de las decisiones de un Comité, aquello no obsta a que el control de legalidad que realiza de tales actuaciones deba cumplir con ciertos estándares mínimos que le permitan verificar el ajuste del procedimiento a los parámetros legales y los estatutos de la organización.



Foja: 1

**UNDÉCIMO:** Que, entonces, en orden a acreditar sus asertos, la parte demandante rindió la siguiente prueba documental:

- Folio 1:
  1. Cartola de inscripción individual de don Abelino Segundo Latorre Moya.
  2. Cartola de inscripción individual de doña Ana Georgina Oteiza Vergara.
  3. Cartola de inscripción individual de doña Angélica Lucía Farías Martínez.
  4. Cartola de inscripción individual de doña Angélica Jeannette Tapia Vásquez.
  5. Cartola de inscripción individual de doña Camila Yasmín Londoño Briones.
  6. Cartola de inscripción individual de doña Eliana Helvia Matus Naranjo.
  7. Cartola de inscripción individual de doña Elizabeth Marisol Riquelme Flores.
  8. Cartola de inscripción individual de doña Erika del Rosario Espinoza Allende.
  9. Cartola de inscripción individual de don Fabián Segundo Manquela Pichulmán.
  10. Cartola de inscripción individual de doña Juana del Carmen Collinao Valenzuela.
  11. Cartola de inscripción individual de doña Marcela Carmen Maldonado Alegre.
  12. Cartola de inscripción individual de doña María Eulalia Martínez Salcedo.
  13. Cartola de inscripción individual de doña María Gladys Valenzuela Cisterna.
  14. Cartola de inscripción individual de doña Marisol del Pilar López Figueroa.
  15. Cartola de inscripción individual de doña Marjorie Solange Millán León.
  16. Cartola de inscripción individual de don Rafael Ernesto Londoño Briones.
  17. Cartola de inscripción individual de don Raúl Sebastián Vera Castillo.
  18. Cartola de inscripción individual de doña Silvia del Carmen Lagos Pulgar.
  19. Cartola de inscripción individual de doña Sonia Graciela Gallegos Muñoz.
  20. Cartola de inscripción individual de doña Sussy del Carmen Oteiza Vergara.
  21. Cartola de inscripción individual de doña Tatiana Idalia Briones Gallegos.



Foja: 1

22. Cartola de inscripción individual de doña Jocelyne Magdalena Rubilar Sánchez.

23. Sentencia de 22 de diciembre de 2015, dictada por el Segundo Juzgado Civil de San Miguel, en los autos rol C-20146-2013.

24. Certificado de avalúo fiscal del departamento rol 1010-128 de la comuna de San Ramón.

**DUODÉCIMO:** Que, a su turno, el SERVIU demandado acompañó los siguientes documentos:

A folio 39:

1. Oficio Ord. N°838, de fecha 30 de agosto de 2012, del Encargado Sección Soporte Técnico y Operacional dirigido al Departamento Jurídico, ambos de Serviu Metropolitano, solicitando el primero un pronunciamiento jurídico respecto a la exclusión y reemplazo de 22 beneficiarios del proyecto "Pablo Laurin".
2. Oficio Ord. N°1.805, de fecha 10 de septiembre de 2012, del Departamento Jurídico de Serviu Metropolitano que se pronunció respecto de la solicitud aludida en el punto anterior, haciendo presente que dicho pronunciamiento es respecto de 20 de los 22 beneficiarios y que se encuentra ajustada a las normas legales y tiene plena validez pues se han cumplido las exigencias legales para ello.
3. Oficio Ord. N°2.440, de fecha 27 de diciembre de 2012, del Departamento Jurídico de Serviu Metropolitano que se pronunció respecto de la solicitud aludida en el punto anterior, haciendo presente que dicho pronunciamiento es respecto de 2 de los 22 beneficiarios.
4. Oficio Ord. N°416, de fecha 15 de enero de 2013, del Director (S) de este Servicio, dirigido al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, solicitando el reemplazo de 22 beneficiarios del proyecto "Pablo Laurin".

**DÉCIMO TERCERO:** Que, conforme se viene razonando, correspondía a la parte demandante acreditar primeramente los supuestos de hecho de la falta de servicio alegada, y que en la especie se traducían, en concordancia a los puntos de prueba fijados en autos, en si los demandantes pertenecieron al Comité de Allegados Poeta Pablo Neruda, y si en dicha calidad fueron postulantes al proyecto "Pablo Laurin" de la comuna de San Ramón; y luego, si fueron excluidos de dicha organización, el motivo de ello, y si fue autorizado por la autoridad competente; y, si como consecuencia de lo anterior, los demandantes fueron excluidos del subsidio habitacional para el proyecto "Pablo Laurín", cuestiones que no ha logrado demostrar.



Foja: 1

En efecto, sólo ha acompañado a los autos las cartolas de inscripción individual de los demandantes, las cuales dan cuenta de que aquellos son beneficiarios de diversos programas de subsidios habitacionales, apareciendo en estado “vigente”, y una sentencia de fecha 22 de diciembre de 2015 en la causa ROL C-20146-2013 ante el 2° Juzgado Civil de San Miguel, la cual da cuenta de una acción por enriquecimiento sin causa o in rem verso deducida por ex socios al Comité de Allegados Poeta Pablo Neruda – distintos a los demandados de autos -, por pagos que habrían realizado al susodicho, la cual no aporta mayores luces acerca de los hechos materia del presente juicio.

Del mismo modo, tampoco se han aportado antecedentes que permitan concluir las restantes aseveraciones de los actores, tales como que el SERVIU no habría revisado los antecedentes relativos al procedimiento de exclusión, que el Comité de Allegados no contaba con estatutos vigentes, actas ni libros, o que a la fecha, se les mantendría con una marca que les impide postular a otros beneficios habitacionales.

Lo anterior, obsta a esta Magistratura en determinar si el SERVIU demandado actuó en forma irregular o desviada de modo de configurar en definitiva la falta de servicio imputada.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, por tanto, no habiéndose acreditado los presupuestos de hecho de la pretensión, resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre los restantes requisitos de la acción deducida, así como de la excepción de prescripción y demás alegaciones del demandado, debiendo rechazarse la demanda en todas sus partes como se dirá en lo resolutivo.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, la restante prueba rendida y que no ha sido detallada en nada altera lo que se viene decidiendo.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, conforme lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no se condenará en costas a los demandantes por haber tenido motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 2, 4 y 42 de la ley N°18.575, artículos 1700, 1702, 1712, 2314, y siguientes del Código Civil; Decreto Supremo N°174 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, artículos 144, 253, 342, 346, 384, 426 del Código de Procedimiento Civil, artículos y demás normas que sean pertinentes, se declara que:

I.- Se rechaza en todas sus partes la demanda de 2 de noviembre de 2022 a folio 1 y rectificada por presentación de folio 6 con fecha 23 de noviembre del mismo año.

II.- Se omite pronunciamiento sobre la excepción de prescripción.





Foja: 1

III.- Cada parte soportará sus costas.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

**Rol: C- 12.573-2022**

Pronunciada por doña Marcia Arce Ayub, Juez Suplente del Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago.

En Santiago a veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro se notifica por el estado diario la sentencia precedente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.**

